

Capítulo 2

¿Por qué renacionalizar? Fundamentos contemporáneos en América Latina

M'Lisa Colbert

Tres décadas después de que las medidas de liberalización, privatización y austeridad desarraigaran todo lo público y redujeran de forma drástica el acceso popular al Estado, los Gobiernos latinoamericanos están renacionalizando sus servicios esenciales. Según un estudio a escala regional que realizamos sobre las renacionalizaciones que se produjeron entre 2000 y 2016 en sectores de servicios esenciales como la gestión de residuos, el agua, las telecomunicaciones, las finanzas y la energía, los procesos de transición no habían sido fáciles, y muchos casos enfrentaban desafíos al parecer insalvables. Por lo general, las iniciativas se habían tomado a raíz del descontento que habían generado las privatizaciones impulsadas por el Consenso de Washington en la década de 1990.

En este capítulo, presentamos algunas observaciones sobre los motivos que explican el afán de renacionalizar y democratizar los servicios esenciales en América Latina. Comienza con un breve resumen del contexto de estas renacionalizaciones y, después, pasa a ofrecer un análisis de los motivos declarados de las desprivatizaciones en la región. En sus páginas se destacan también casos ejemplares de renacionalización que han ido acompañados de mecanismos democratizadores y de un compromiso renovado con el espíritu del servicio público. Los casos se exponen en detalle, haciendo hincapié en los beneficios concretos que han reportado estas transiciones.

En sentido estricto, las desprivatizaciones —y las posteriores renacionalizaciones— que hemos presenciado en la región no son casos de ‘remunicipalización’, ya que las concesiones para estos servicios han sido

otorgadas por Gobiernos nacionales (y no por autoridades municipales), que en la mayoría de los casos son también las nuevas autoridades gestoras. Sin embargo, las lecciones que podemos extraer de estos casos son de importancia para el tema de que se ocupa este libro, aunque funcionen a una escala distinta, porque representan un compromiso renovado con la vocación pública en un mundo cada vez más privatizado.

¿Por qué desprivatizar?

En América Latina, los servicios esenciales como el agua, la electricidad, las telecomunicaciones y la gestión de residuos se privatizaron en la década de 1990, en el marco de los programas de ajuste estructural que recomendaban instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se esperaba que, de este modo, se pudiera estabilizar la economía tras la crisis de la deuda de los años ochenta. No obstante, las privatizaciones no lograron el éxito previsto. Sí se logró una estabilidad económica pasajera porque se incrementaron los ingresos con la venta de empresas públicas,¹ pero en su mayor parte, el crecimiento benefició principalmente a compañías multinacionales y grandes grupos económicos. Nunca superó los niveles de crecimiento observados con las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) de la década de 1980, y debido a las bajas tasas de impuestos y cánones, los pagos de intereses sobre la deuda y la mentalidad de maximización de los beneficios, una gran parte de los ingresos y beneficios de todo crecimiento que se experimentó acabó volviendo a los países desarrollados.² Según el consenso imperante, cuanto mayor fuera la presencia del mercado, menos influirían la corrupción, el nepotismo y la ineficiencia del Estado en la estabilidad económica. Incluso en los casos en que las empresas no se privatizaron por completo, las empresas ‘públicas’ empezaron a aplicar medidas corporativas y de ‘nueva gestión pública’, centradas en maximizar la eficiencia y los beneficios, en contraposición a valores de interés público como la equidad y la asequibilidad. Al principio, estas medidas solucionaron algunos de los problemas derivados de la corrupción, pero también socavaron los mecanismos de control

y rendición de cuentas.³ Los datos del estudio ponen de relieve que, en la mayoría de los casos, crearon espacios para nuevos tipos de corrupción, por los que las compañías privadas empezaron a eludir normativas, evitar la transparencia, descuidar sus obligaciones contractuales e ignorar las cuotas de reinversión porque se hizo más difícil para el Gobierno y la sociedad supervisar las acciones del sector privado.

Apenas una década después de que se iniciara la transición, el desarrollo desigual estaba desbocado, los beneficios se habían convertido en algo más importante que la gente, y la propiedad y el control de los servicios esenciales se habían apartado de las personas que los usaban. Esto generó un profundo descontento, y en la región prosperó la idea de que las privatizaciones conllevaban impactos negativos. En 2001, el 60 por ciento de las personas que respondieron a una encuesta regional del Latinobarómetro señalaron que estaban ‘en desacuerdo’ o ‘muy en desacuerdo’ con el uso de las privatizaciones como un instrumento para mejorar el bienestar social.⁴ La gente era consciente del hecho de que las privatizaciones no solo limitaban el acceso a los servicios y los encarecía, sino que también iban acompañadas de un control cada vez menos popular sobre la toma de decisiones. Debido a las privatizaciones, la cultura y la práctica de la formulación de políticas en el seno de las instituciones estatales habían pasado a estar determinadas por la búsqueda de la liberalización económica, lo cual redujo de forma drástica el acceso popular al Estado y reforzó la opinión de que la perspectiva de las personas carecía de valor en estos procesos.⁵ En torno al inicio del nuevo milenio, comenzamos a ver un declive de los partidos políticos de la derecha, sometidos a una presión inmensa de los movimientos sociales, que exigían que se redistribuyeran desde abajo los bienes sociales y de la ciudadanía.⁶ Desde los piqueteros en Argentina, al Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, pasando por los cocaleros en Bolivia, los zapatistas en México y el Consejo de Movimientos Sociales en Chile, estos nuevos movimientos sociales fueron clave a la hora de determinar la sucesión de Gobiernos de izquierda que fueron elegidos en la región a partir de 2000.⁷ Entre 2010 y 2015, la mitad de los países de América Latina —entre los cuales Argentina, Bolivia, Brasil,

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela— eligieron y auparon al poder a presidentes de izquierdas. Muchos de ellos fueron elegidos porque habían hecho campaña expresa para solventar problemas sociales asociados con los fallos de las privatizaciones, y la renacionalización era uno de los medios para lograr este fin.⁸

Motivos declarados

En nuestro estudio, examinamos los motivos declarados en 33 casos de renacionalización en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Belice, Uruguay, Nicaragua y República Dominicana. Los datos recopilados en cada uno de los casos procedían de un estudio documental de decretos ejecutivos, comunicaciones públicas, discursos ejecutivos, noticias de prensa y una revisión de la literatura sobre experiencias de renacionalización. Nos centramos en los objetivos y valores de los casos que priorizaban la transparencia, la equidad, el acceso universal, la asequibilidad, la sostenibilidad ambiental, unos servicios de calidad, la participación pública y/o el salario digno con un empleo seguro. El estudio fue minucioso y se realizó de manera sistemática, pero debido a limitaciones de tiempo y recursos, no incluye todos los casos de renacionalización de la región, por lo que las conclusiones que se presentan aquí sobre los motivos más importantes para renacionalizar en América Latina deben leerse teniendo en cuenta este factor. Tras analizar los datos, en los 33 casos que estudiamos surgieron 10 motivos distintos. Estos motivos se contrastaron con los 33 casos para ver con qué frecuencia aparecían. La frecuencia de cada uno de los motivos aparece en la Tabla 1, donde se enumeran, por orden descendente, de los más frecuentes a los menos.

Tabla 1. Frecuencia de los motivos declarados

Motivos declarados	Frecuencia
Mala gestión del sector privado (corrupción, sobornos, incumplimiento del contrato, dividendos excesivos, beneficios por encima de los límites contractuales, etc.)	60 %
Recuperación de la titularidad y el control públicos	54 %
Redistribución entre ricos y pobres	33 %
Priorización e incremento de las reinversiones	30 %
Aumento de las rentas generales del Estado	15 %
Rebaja del coste de servicios básicos	15 %
Incremento del acceso a servicios	15 %
Programas/Prestaciones sociales	12 %
Puesta en práctica de valores socialistas	12 %
Centralización	12 %

La Tabla 1 destaca que el motivo manifestado de forma más habitual en estos casos fue la mala gestión del sector privado. En 20 de los 33 casos (el 60 por ciento de los casos analizados), este se expresó como un asunto prioritario en la decisión de renacionalizar. Por ejemplo, en Argentina, el Gobierno de Néstor Kirchner renacionalizó en 2004 la empresa francesa de telecomunicaciones Thales Spectrum SA, alegando una falta de inversiones, el incumplimiento del pago de los cánones acordados y el registro de beneficios por encima de los límites contractuales. En Bolivia, el Gobierno de Evo Morales renacionalizó en 2010 la empresa francesa Electricidad Corani y la rebautizó con el nombre de Empresa Nacional de Electricidad, por causas como los elevados niveles de insolvencia financiera, las preocupaciones ambientales y porque la mala gestión de las operaciones estaban alterando la capacidad efectiva y amenazando la seguridad energética del país. En Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa renacionalizó en 2014 el sistema de fondos privados de pensiones debido a las desigualdades en su cobertura, un rendimiento volátil y quejas de que no se estaban efectuando los pagos de las prestaciones por desempleo. En

Venezuela, el Gobierno de Hugo Chávez renacionalizó en 2007 la empresa de telefonía CANTV, participada mayoritariamente por capital estadounidense, por el incumplimiento de las obligaciones en materia de inversión, unos dividendos excesivos y la mala administración de la empresa. Estos ejemplos ponen de relieve que las asociaciones con el sector privado y la liberalización no son buenas soluciones para financiar con eficacia las infraestructuras de servicios públicos. Además, este planteamiento no se corresponde con el deseo de muchos de estos países de redefinir la sociedad a través de las políticas económicas y políticas. Así lo ilustra el hecho de que, en muchos de los casos analizados, se alegaron motivos que persiguen priorizar a las personas, como la distribución equitativa, la reinversión en los servicios, el acceso universal y la reducción del coste de los servicios. En el apartado siguiente se enfatiza que varios de estos casos —aunque con sus limitaciones— demuestran un compromiso ejemplar con la democratización y los valores públicos que ejemplifican los beneficios de la titularidad pública de los servicios esenciales.

Principales renacionalizaciones en América Latina

Bolivia, sector del gas y el petróleo, 2006

En 2006, sometido a la presión popular y de varios grupos activistas, el presidente Morales declaró que cumpliría su promesa electoral de nacionalizar el sector de los hidrocarburos del país. El Gobierno de Morales redactó, por decreto ejecutivo, un anexo a la Ley de Hidrocarburos, que aludía al carácter inconstitucional de los contratos privados que se habían firmado en la década de 1990 porque despojaban al pueblo de su derecho constitucional a poseer y controlar los depósitos minerales del país, tanto bajo tierra como encima de esta. Los contratos privados habían arrebatado al Estado el derecho a comercializar y vender las reservas una vez que salían a la superficie. El decreto ejecutivo puso fin a lo que los grupos de la sociedad civil entendían que constituía una subversión injusta de los derechos constitucionales de los bolivianos y las bolivianas por

parte de actores privados. Posteriormente, Morales expropió todos los yacimientos de gas y petróleo del país y las multinacionales se vieron obligadas a firmar nuevos contratos en los que recibieron participaciones minoritarias, mientras que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) obtenía una participación mayoritaria y todos los derechos de propiedad. Esta nueva configuración suponía, en la práctica, que las compañías privadas se hicieran con el 18 por ciento de las ganancias en el sector y, el Estado, con el 82 por ciento, y no al revés.⁹ Esta nacionalización fue de especial importancia porque se ha convertido en el eje central de la economía boliviana y simboliza el regreso de Bolivia a una economía de productos básicos. Los ingresos generados con el sector de los hidrocarburos que se ingresan en el erario público son un pilar clave de las iniciativas del Gobierno para fomentar la distribución de la riqueza y la inclusión social. Por otra parte, la recuperación del control y el aumento de los ingresos del sector de los hidrocarburos también facilitó que, más tarde, se materializaran otras nacionalizaciones en los sectores de la electricidad, las pensiones y las telecomunicaciones.¹⁰

Beneficios. El décimo aniversario de la nacionalización se celebró en 2016, cuando Morales anunció que, tras la decisión adoptada en 2006, se habían generado ingresos por un valor de 31 500 millones de dólares, una cifra muy superior a la década anterior, cuando los ingresos ascendían apenas a los 3500 millones de dólares. La nacionalización triplicó el producto interior bruto de Bolivia entre 2005 y 2015, y en los últimos nueve años aumentó la inversión en gasto público en más de un 750 por ciento.¹¹ Además, en comparación con otras renacionalizaciones en el sector de los hidrocarburos, la experiencia boliviana parece mostrar un mayor compromiso con los valores públicos. En Venezuela, parece que el proceso se ve afectado por más problemas de transparencia y corrupción en las asignaciones de contratos, y no se está cumpliendo el requisito legislativo de que la propiedad estatal sea del 50 por ciento. En

Bolivia, en cambio, el Gobierno celebró un referendo en 2004 para evaluar la opinión pública sobre la nacionalización, la propiedad estatal y la ley sobre privatizaciones de 1996. Los resultados del referendo revelaron que el 92 por ciento de los votantes estaba a favor de nacionalizar el sector nacional de los hidrocarburos, y que el 87 por ciento apoyaba la derogación de la ley sobre privatizaciones de 1996.¹²

Hay también otros beneficios, como la posibilidad de priorizar las inversiones locales y nacionales por encima de inversiones de las compañías internacionales. Los compromisos de carácter local, por los que, por ejemplo, se debe contratar a trabajadores y trabajadoras de empresas locales del sector manufacturero, como soldadores, administradores e ingenieros, ahora forman parte de las negociaciones para los contratos de la industria del gas. También se mejoraron los procesos de consulta con las comunidades locales. Morales promulgó el Decreto Supremo N. 3058, junto con la Ley 3058, que establece la obligatoriedad de las consultas ambientales con las comunidades locales y las poblaciones indígenas que viven cerca de donde se desarrollan los proyectos. Aunque este representa un logro en el ámbito de la participación, el alcance y el impacto de esta se sigue considerando como algo que se debe mejorar, ya que la ley deja claro que, en los casos en que no se pueda llegar a un consenso, las decisiones se tomarán en pro del interés nacional.¹³ Por último, la nacionalización ha ayudado a Bolivia a lograr una mayor independencia internacional. Los ingresos del sector de los hidrocarburos se redirigen al Banco Central, que ha estabilizado unos niveles adecuados de moneda estadounidense para cubrir los gastos de importación del país (reservas internacionales). Esto impide que la administración sufra crisis en la balanza de pagos y elimina la necesidad de recurrir a los préstamos del FMI, de los cuales Bolivia dependía en gran medida antes de que decidiera nacionalizar el sector, en 2006.

Bolivia, fondo nacional de pensiones, 2006

Antes de que se decidiera nacionalizar el sistema, el fondo de pensiones de Bolivia estaba organizado a través de un modelo privado y con aportaciones individuales, en que el sector privado —articulado en un consorcio de compañías españolas y suizas— controlaba las decisiones de inversión. En 2010, Bolivia anunció que sustituiría el sistema privado por un sistema público de reparto y crearía una prestación de jubilación universal y no contributiva para los bolivianos y las bolivianas de más de 60 años, llamada Renta Dignidad. Más adelante, la prestación amplió los criterios para que se pudieran acoger a ella más ciudadanos y ciudadanas e incrementó la suma anual en un 25 por ciento, de 1800 bolivianos (235 dólares estadounidenses) a 2400 bolivianos (314 dólares). Además, la prestación tiene en cuenta los distintos pagos, de forma que quienes ya contribuyen a una jubilación o la reciben de otra fuente, solo reciben el 75 por ciento de la Renta Dignidad que recibe el resto de personas beneficiarias.¹⁴ En este caso, los principales motivos que impulsaron la iniciativa fueron rebajar la edad mínima de jubilación, mejorar la distribución de las prestaciones y recuperar el control de la gestión de las inversiones. La reforma invierte los instrumentos que se activaron en el marco del programa de ajuste estructural de 1997, al eliminar la administración privada de los fondos y sustituirla por una sola agencia, que es propiedad del Gobierno y se encarga de gestionar los activos. Desde que el Gobierno de Morales empezó a controlar la gestión del fondo de pensiones, el financiamiento procede de un porcentaje fijo del impuesto directo especial sobre el sector de los hidrocarburos, recién nacionalizado, de aportaciones de todos los niveles de gobierno, y de dividendos de otras empresas públicas recientemente nacionalizadas, como en el sector de la electricidad y las telecomunicaciones.¹⁵

Beneficios. El fondo de pensiones reformado ha recibido excelentes evaluaciones de organizaciones nacionales e internacionales. En general, ha mejorado de manera significativa la calidad de vida de la población de más edad en Bolivia y ha ayudado a reducir las tasas de pobreza extrema en el país. Por ejemplo, el Gobierno de Morales redujo a 60 la edad para poder recibir la prestación y rebajó la edad mínima de jubilación de los 65 a los 58 años, de forma que la edad para jubilarse fuera más realista, teniendo en cuenta que el promedio de esperanza de vida es de 68 años para los hombres y de 73 para las mujeres. La suma de la prestación universal es de unos 340 dólares anuales para quienes no reciben ya una prestación de la Seguridad Social, y del 75 por ciento de esa cantidad para quienes sí la reciben; los pagos pueden ser mensuales o, según una nueva opción que ofrece el sistema público, se pueden acumular hasta 12 meses y cobrarse en un único pago anual. Se trata de un incremento notable de las pensiones, que representa una distribución más equitativa de las prestaciones y beneficia a varios grupos sociales. De las 800 000 personas que cobraron la prestación en 2010, el 83 por ciento no recibía ninguna otra pensión del régimen de la Seguridad Social, porque había trabajado en el sector informal o vivido largos períodos de desempleo. Desde que se puso en marcha la iniciativa, en 2008, se han redirigido más de 500 millones de dólares de márgenes de beneficio del sector privado al pueblo boliviano.¹⁶

Argentina, servicio postal, 2003

El servicio postal de Argentina, Correo Argentino (CORASA), fue el primer servicio público que se nacionalizó durante el Gobierno del presidente Néstor Kirchner. Antes de la nacionalización, Correo Argentino había sido privatizado en 1997, durante el Gobierno de Carlos Menem, por medio de un decreto ejecutivo. El Grupo Macri, uno de los grupos económicos más importantes de Argentina, se

hizo con el control del sector al obtener una concesión de 30 años como proveedor. Las condiciones del contrato estipulaban que el Grupo Macri abonaría al Estado un canon anual por la gestión del servicio y que mantendría a toda la plantilla, salvo si revisaba los contratos vigentes durante los primeros 180 días de la concesión. A cambio, el Estado le seguiría garantizando una subvención regional para ayudarle a asumir las pérdidas por operar en zonas remotas del país y seguir prestando el servicio a toda la Argentina.¹⁷ Apenas dos años después de que se firmara la concesión, en 1999, el Grupo Macri dejó de pagar al Gobierno los cánones que le correspondían, la calidad del servicio seguía siendo baja pese a que se habían previsto mejoras, las rutas rurales estaban mal atendidas y los precios habían aumentado varias veces. En 2003, por recomendación de la Auditoría General del Estado, el Gobierno de Kirchner rescindió la concesión al Grupo Macri y renacionalizó el servicio postal.

Beneficios. Aunque el servicio postal se vio aquejado por graves pérdidas debido a la privatización, el Gobierno de Kirchner logró mejorar la prestación del servicio y volver a priorizar las rutas rurales que habían sido desatendidas por el Grupo Macri. Además, redujo el coste del servicio postal y aumentó su fiabilidad y los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin embargo, en febrero de 2017, el servicio postal volvió a ser objeto de protestas. El descontento está vinculado con un acuerdo que el presidente Mauricio Macri (hijo de Franco Macri, dueño del Grupo Macri) celebró con la compañía de su padre unos meses después de asumir el cargo en 2015. En el año 2001, mientras aún mantenía la concesión del servicio postal, el Grupo Macri había declarado la bancarrota, y debía más de 128 millones de dólares al Gobierno. Aunque durante el Gobierno de Kirchner nunca se alcanzó un acuerdo de pago, Macri revaluó la deuda en 19 millones de

dólares y permitió a la compañía que la pagara durante 15 años a una baja tasa de interés del 7 por ciento,¹⁸ lo cual suscitó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y transparencia.

Argentina, transporte aéreo, 2008

Los Gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Kirchner (2007–2015) hicieron de la unidad nacional, la inclusión y la equidad una parte importante de las políticas económicas, políticas y sociales que adoptaron durante su mandato. En 2008, el Gobierno de la presidenta Christina Kirchner decidió renacionalizar la compañía Aerolíneas Argentinas. Antes de la nacionalización, la aerolínea era propiedad de un consorcio español llamado Grupo Marsans. En el momento de nacionalizar la compañía privada, esta había acumulado un déficit de 900 millones de dólares debido a la mala gestión, la corrupción y el reparto de dividendos excesivos entre sus más altos ejecutivos. A raíz de la nacionalización, el Grupo Marsans presentó una demanda internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, esgrimiendo el trato injusto que se le había dispensado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El Grupo Marsans exigía que el Gobierno le pagara una indemnización de 1400 millones de dólares, en concepto de daños. La controversia aún no se ha resuelto y, desde entonces, el Grupo Marsans se ha declarado en bancarrota. El principal motivo para nacionalizar la empresa era el de prestar una cobertura unificada a las zonas rurales y urbanas de Argentina, garantizando unas rutas internas que el modelo privado consideraba que no resultaban rentables. El Gobierno de Kirchner deseaba recuperar el control público para compensar los años de falta de inversiones, los dividendos excesivos y la mala gestión operativa del sector privado. Además, esperaba que la reorganización de las aerolíneas aumentara el tráfico de pasajeros para reducir el coste

de los pasajes nacionales e instaurar un control estatal sobre el mercado interno.

Beneficios. Desde que se nacionalizó, la situación financiera de la compañía ha mejorado de forma espectacular. El tráfico de pasajeros del grupo alcanzó un récord de 8,5 millones en 2013, lo cual representa un incremento del 57 por ciento desde la renacionalización, en 2008. Los ingresos crecieron hasta un récord de 2000 millones de dólares en 2013, cifra que equivale a un aumento del 85 por ciento con respecto a los ingresos registrados en 2008.¹⁹ Se introdujeron nuevas rutas internas, como un vuelo de conexión entre la ciudad portuaria de Buenos Aires y Río Gallegos, en el extremo sur de Argentina, y Córdoba y Salta, en el norte del país. En estos momentos, la aerolínea abarca más del 80 por ciento de todos los vuelos nacionales. Sin embargo, tras la elección del presidente Mauricio Macri, del centro-derecha, el Gobierno está interesado en volver a privatizar algunos de los sectores nacionalizados durante los Gobiernos de los Kirchner. A raíz de un estudio reciente de la administración Macri sobre una iniciativa para ‘abrir los cielos’, se está estudiando la posibilidad de reprivatizar la compañía Aerolíneas Argentinas. Aunque se están organizando protestas públicas desde diciembre de 2016 y el plan público concebido por los Kirchner ha experimentado una mejora significativa en materia de crecimiento desde la renacionalización, las nuevas políticas promovidas por el Gobierno Macri catalogan a la empresa de no rentable.²⁰

Conclusión

Como ilustran estos ejemplos, la renacionalización de los servicios públicos en América Latina no está exenta de desafíos. Aunque el descontento manifestado por la privatización y el deseo de cambio fueron la principal fuerza motora en la mayoría de estos casos, muy pocos lograron alcanzar

su anhelo expreso de abandonar por completo la participación del sector privado. Muchos Gobiernos acabaron viéndose obligados a mantener estrategias económicas impopulares para financiar los programas sociales o desplegaron programas que satisfacen solo una parte de las demandas originales. En otros casos, las deudas generadas por la privatización han influido de forma negativa en la mejora de la calidad de los servicios en la región. Y sin duda, para los países de la región cada vez es más difícil romper con el molde del sector privado y ofrecer unos servicios totalmente públicos debido a las consecuencias que enfrentan por la aplicación previa de instrumentos neoliberales. También resulta preocupante el hecho de que, en muchos casos, el cambio se esté produciendo por decreto ejecutivo, y no se esté creando consenso. Por otra parte, algunos países están volviendo a adoptar el planteamiento estatista centralizado y jerárquico típico de la década de 1950 y restableciendo unas economías centradas en los productos básicos, que garantizan estabilidad en el corto plazo, pero que conllevan el riesgo de las etapas de auge y caída en largo plazo, ya que el precio de los productos fluctúa constantemente.²¹ Por último, algunos prominentes y acaudalados grupos sociales con viejos lazos familiares continúan controlando muchas industrias importantes de la región, lo cual dificulta las acciones que pueda emprender cualquier Gobierno para democratizar los servicios y convertirlos en propiedad pública.

Sin embargo, los ejemplos también ponen de relieve que retomar el control público de los servicios no solo representa un deseo expreso en la región, sino también una alternativa viable. Los bolivianos y las bolivianas recibieron 500 millones de dólares que, de otro modo, habrían acabado en bolsillos privados. Y gracias a la renacionalización, a quienes viven en entornos rurales en Argentina se les dio la posibilidad de enviar y recibir correo de forma regular. Como muchas de las renacionalizaciones se produjeron en 2012, aún no está claro qué resultados brindarán en el largo plazo. No se sabe si la renacionalización logrará satisfacer de manera democrática la demanda social de servicios básicos, o si la magnitud de la labor, teniendo en cuenta la tremenda presión de las restricciones

neoliberales y los recientes giros electorales hacia la derecha, superará las iniciativas que abogan por el cambio. Pero pese a todas las incertidumbres, estos procesos de transición son fuente de inspiración. Las conclusiones del estudio ponen de manifiesto que estos casos constituyen espacios en la región donde se están concibiendo y desplegando alternativas progresistas en materia normativa, y donde están prosperando debates y políticas²² —en un mundo cada vez más apolítico—,²³ que socavan la hegemonía del Consenso de Washington. Y eso no es poca cosa.



M'Lisa Colbert está finalizando un máster en Estudios de Desarrollo Global en la Universidad de Queen, Kingston, Canadá. El tema de su tesis de máster se centra en la transición a las energías renovables en América Central, y en las relaciones de poder que rodean a las iniciativas para democratizar la energía y mejorar el acceso a esta. También colabora como asistente de investigación en el Proyecto Servicios Municipales (MSP).

Notas

- 1 Gwynne, R. N. y Kay, C. (2000) Views from the periphery: Futures of neoliberalism in Latin America. *Third World Quarterly*, 21(1): 141–156.
- 2 Cannon, B. (2009) *Hugo Chávez and the Bolivarian revolution: Populism and democracy in a globalised age*. Londres: Manchester University Press.
- 3 Chavez, D. (2012) 16 Alternatives in the Electricity Sector in Latin America. *Alternatives*, 453.
- 4 Latinobarómetro Corp. (sin fecha) The privatization of state companies has been beneficial to the country. Base de datos del Latinobarómetro. <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp> (consultado el 10 de febrero de 2017).
- 5 Grugel, J. y Riggiozzi, P. (2012) Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and reclaiming the state after crisis. *Development and Change*, 43(1): 1–21.
- 6 Dominguez, F., Lievesley, G. y Ludlam, S. (2011) *Right wing politics in the new Latin America: Reaction and Revolt*. Londres: Zed Books.
- 7 Prevost, G., Oliva Campos, C. y Vanden, H. (eds.) (2012) *Social movements and leftist governments in Latin America: Confrontation or co-optation*. Londres: Zed Books.
- 8 Berrios, R., Marak, A. y Morgenstern, S. (2011) Explaining hydrocarbon nationalization in Latin America: Economics and political ideology. *Review of International Political Economy*, 18(5): 673–97.
- 9 Kaup, B. Z. (2013) *Market justice: Political economic struggle in Bolivia*. Nueva York: Cambridge University Press.
- 10 Flores-Macías, G. A. (2010) Statist vs. pro-market: Explaining leftist governments' economic policies in Latin America. *Comparative Politics*, 42 (4): 413–433.
- 11 *TeleSur* (2014) Ten Important Accomplishments Under Evo Morales. <https://www.telesurtv.net/english/analysis/Ten-Important-Accomplishments-Under-Evo-Morales-20141009-0069.html> (consultado el 27 de febrero de 2017).
- 12 Kaup, B. Z. (2013) *Market justice: Political economic struggle in Bolivia*. Nueva York: Cambridge University Press.
- 13 Villegas, P. (2010) Principales fallas y limitaciones del proceso de consulta previa en Bolivia. *Plataforma Energética*, 3 de noviembre. <http://plataformaenergetica.org/content/2375>
- 14 Müller, K. (2009) Contested universalism: From Bonosol to Renta Dignidad in Bolivia. *International Journal of Social Welfare* 18(2): 163–72.
- 15 *Open Democracy* (2014) Lessons from Bolivia: Re-Nationalising the hydrocarbon industry. 19 de noviembre. <http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/stephan-lefebvre-jeanette-bonifaz/lessons-from-bolivia-renationalising-hydrocarbon-indust> (consultado el 27 de febrero de 2017).
- 16 PNUD (sin fecha) The Dignity Pension (Renta Dignidad): A universal old-age pension scheme – Bolivia. En Volume 18: *Sharing Innovative Experiences*. <http://165.65.7.68/GSSDAcademy/SIE/SIEV1CH2/SIEV1CH2P2.aspx#> (consultado el 26 de febrero de 2017).
- 17 Baer, W. y Montes-Rojas, G. (2008) From privatization to re-nationalization: What went wrong with privatizations in Argentina? *Oxford Development Studies*, 36(3): 323–37.
- 18 *Reuters* (2017) Argentine Prosecutor Asks to Investigate President over Postal Service Deal. 14 de febrero. <http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN15T2OY?feedType=RSS&feed-Name=worldNews&pageNumber=2&virtualBrandChannel=0> (consultado el 27 de febrero de 2017).
- 19 *Foco Económico* (2012) Aerolíneas Argentinas post-nacionalización: ¿mejoró la gestión? 12 de diciembre. <http://focoeconomico.org/2012/12/12/aerolineas-argentinas-post-nacionalizacion-mejoro-la-gestion/> (consultado el 27 de febrero de 2017).

- 20 Agencia EFE (2016) Argentine airline workers protest government's push for open skies. 27 de diciembre. <http://www.efe.com/efe/english/business/argentine-airline-workers-protest-government-s-push-for-open-skies/50000265-3135009> (consultado el 27 de febrero de 2017).
- 21 Flores-Macías, G. A. (2010) Statist vs. pro-market: Explaining leftist governments' economic policies in Latin America. *Comparative Politics*, 42 (4): 413-433.
- 22 Roberts, K. (2009) Beyond neoliberalism: Popular responses to social change in Latin America. In *Beyond Neoliberalism in Latin America?* (1-13). Nueva York: Palgrave Macmillan.
- 23 Wilson, J. y Swyngedouw, E. (eds.) (2014) *The post-political and its discontents: Spaces of depoliticisation, spectres of radical politics*. Edimburgo: Edinburgh University Press.